

## AMPARO

*Promovido ante el Juzgado de Distrito de Chihuahua, por los CC. Florencio Roman y compañeros, contra la sociedad nueva Herrera, Gonzalez, Salazar y compañía.*

### PEDIMENTO FISCAL.

Ciudadano Juez de Distrito.

En mi anterior alegato de fecha 7 del mes próximo pasado, entre otras cosas, tuve el honor de decir lo siguiente:

"Si el amparo se pide contra los actos del primero, (la compañía minera Herrera, Gonzalez, Salazar y C<sup>ta</sup>), es evidente que no procede el recurso, porque el Sr. Herrera no está revestido de autoridad alguna, y al emitir la moneda palo que se asegura, lo hace como simple particular y como dueño de una negociación de minas, en que no tiene ingerencia alguna el Ciudadano Gobernador, ni autoridad alguna del Estado.

Si se solicita contra el segundo, (esto es, el Gobernador del Estado,) tampoco procede en derecho, porque no reconociendo el Estado esta moneda palo, ni siendo emitida por disposición del gobernador, ni autoridad alguna, no puede haber infracción por parte de estos del art. 111 fracción 3<sup>a</sup> que se cita.

La expresada moneda es emitida por un particular, y tiene un precio convencional entre el reducido número de personas que la reciben, relativamente al número de personas de que se compone el Estado de Chihuahua.

Si esta moneda sufre algún detrimento en su precio convencional, al pasar de las manos del emitente á las de las personas que la reciben, habrá en ello un abuso, lo mismo que en su emisión; pero cuyo correctivo está en las mismas leyes comunes.

Los actos del C. Herrera como simple particular y dueño de una negociación de minas, están en efecto sujetos á la acción de los Tribunales Comunes."

Concluí en consecuencia pidiendo, que la Justicia de la Union no amparase ni protegiere á los quejosos, contra los actos del C. Herrera en la emisión de moneda de palo, ni contra la providencia ó acuerdo del Ciudadano Gobernador del Estado, que dispuso ocurrieran á deducir sus derechos ante los Tribunales respectivos.

Ampleando hoy este mi anterior alegato, que reproduzco en todas sus partes, debo manifestar: que en mi concepto seria muy conveniente que el Ciudadano Juez de Distrito mandase practicar una información por cuerda separada y enteramente independiente de este juicio de amparo, acerca de la emisión de esta moneda palo; porque si el art. 111 en su fracción 2<sup>a</sup> prohíbe á los Estados de la Confederación Mexicana, acuñar moneda, emitir papel moneda, ni papel sellado, con mucha mas razón debe estar prohibido á los particulares. Puede haber en esto no solamente un abuso, sino una falta grave, un delito tal vez que las leyes deben corregir; y siendo de la atribución exclusiva de la Federación la acuñación de moneda, así como la emisión de papel moneda y papel sellado, á los Tribunales y Juzgados federales corresponde también exclusivamente el conocimiento de estos negocios.

He dicho que por cuerda separada é independiente del juicio de amparo, porque según el art. 102 de la Constitución general, la sentencia que se pronuncie será siempre tal, que solo se ocupe de individuos particulares, limitándose á ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre que versa el proceso, sin hacer ninguna declaración general respecto de la ley ó acto que la motivare.

Reasumiendo todo lo expuesto en este, como en el anterior dictámen que se registra en estos autos, el que lleva la voz fiscal concluye por segunda vez pidiendo se declare:

Primero: que la Justicia de la Union no ampara ni protege á los quejosos, contra el acto de la emisión de moneda de palo hecha

por el C. Herrera, representante de una compañía minera en Cosihuixiachi.

Segundo: que tampoco los protege ni ampara contra el acuerdo del ciudadano gobernador del Estado, por el cual se dispuso ocurriesen los quejosos ante los tribunales comunes á hacer valer sus derechos.

Tercero: que no ha lugar en el presente juicio de amparo á que se proceda contra el ciudadano gobernador del Estado, porque aun cuandola infraccion que se dice del art. 111 de la Constitucion, proviniera de él, se necesitaría que el Congreso general declarase previamente que habia lugar á formacion de causa, para que se procediese en su contra, arts. 105 hasta 108 de la Constitucion; y que tampoco ha lugar á la imposicion de la multa que se solicita á la compañía minera, "Herrera, Gonzalez, Salazar y Compañía."

Cuarto: que compulsándose copia de todo lo que sea conducente de los autos, se pasen al Promotor fiscal que suscribe, para que por cuerda separada é independiente del presente juicio de amparo, promueva lo que corresponda en derecho respecto de la emision de moneda de palo que se denuncia.

Chihuahua, Octubre 3 de 1874.—*Juan de Dios Burgos.*

#### *Sentencia del C. Juez de Distrito.*

Chihuahua, Octubre 8 de 1874.—Visto este juicio de amparo intentado por los socios Florencio Roman, Amado Aragon, Juan Chacon, Francisco Baltazar, Pioquinto Hernandez, Refugio Gonzalez, Rosario Arana, Librado Olivar, Concepcion Almanzar, Refugio Cano, Jesus M.<sup>a</sup> Almanzar, Pilar Terrán, Luis Almanzar, Vicente Moreno, Estéban Moreno, Rafael Villegas, Antonio García, Amado Ramos, Dionisio Cisneros, Andrés Nieto, Manuel Aragon, Jesus Pallares, Felipe Gamboa, Maximiano Arzola, Trinidad Ramirez, Anselmo Guerra, Teodoro Guerrero, Jesus Orozco, Antonio Olivar, Benedicto Orozco, Dolores Ramirez,

TOMO VII.—PARTE II.

Apolinar García, Juan Molina, Julian Morales y Francisco Molinar, vecinos del Canton Abazolo, contra la casa de comercio que gira en esta ciudad bajo la razon social de "Herrera, Gonzalez, Salazar y Compañía," por considerar que dicha sociedad infrinje la frac. 3.<sup>a</sup> del art. 111 de la Constitucion federal de 1857, al hacer circular piezas de madera, con sello particular, dándoles el mismo uso que si fueran moneda, con que se les paga parte del salario que devengan en su calidad de barreteros en la negociacion de minas de la referida compañía, y por darles los efectos de primera necesidad, con que tambien se les paga, á un precio crecido; y contra el ciudadano Gobernador del Estado, por autorizar, segun los quejosos, esos hechos que repudia la Constitucion. Constando de autos: que el dia 3 de Setiembre próximo pasado, presentaron escrito los interesados, manifestando que hace tres años trabajaban en las minas que explota la casa de comercio "Herrera, Gonzalez, Salazar y Compañía," recibiendo en recompensa efectos de primera necesidad, á un precio exorbitante, poniendo por ejemplo: que el azúcar se les dá á cinco reales la libra, la sal á doce reales almud, la harina á tres pesos arroba, el café á siete reales y medio libra; y por ese estilo los demas artículos, y que la parte que se les pagaba en la moneda madera, que emitía la misma compañía, luego que pasaba á su poder sufría un descuento de la mitad del valor representativo; que cansados de esas demasías, se quejaron ante la primera autoridad política del Canton Abazolo, la que no solo no les administró justicia, sino que los trató mal: que entónces ocurrieron al ciudadano gobernador y comandante militar del Estado, quien resolvió que no habia lugar á lo que solicitaban, por no ser el Gobierno el que emitia la moneda, y porque los derechos recíprocos de la compañía contra sus sirvientes, y los de estos contra aquella, debian ejercitarse ante la autoridad judicial y resolverse con arreglo á la ley 7.<sup>a</sup> sec. 25.

11ª de la colección de leyes del Estado, y concluyen pidiendo, que se les ampare contra la repetida casa "Herrera, Gonzalez, Salazar y Compañía," y que se someta á juicio al ciudadano gobernador y comandante militar del Estado: acompañaron á este escrito, copia del que elevaron al Gobierno, de la resolución que á él recayó y algunas libretas y piezas de madera selladas. Que admitido y pedido el informe prescrito en el art. 9º de la ley de la materia, el ciudadano gobernador y comandante militar evacuó el que consta á fojas 32, y el ciudadano Promotor fiscal formuló el pedimento que creyó de justicia. Que se recibió el negocio á prueba, y los interesados adujeron la que les convino, reducida á las declaraciones de ocho testigos, que contestes aseguran, que la compañía "Herrera, Gonzalez, Salazar y Compañía," emite moneda de madera: que con ella y con efectos á precio doble del corriente de la plaza, paga á sus operarios: que las piezas de madera circulan en todo el comercio de Cosihuiriachic, el que las recibe, lo mismo que la compañía, por la mitad del valor que representan; en el término legal formularon los quejosos y ciudadano promotor fiscal, sus respectivos alegatos, y

Considerando: que el amparo no procede contra algun particular, cualquiera que sea el hecho ó acto que se reclame, y cualesquiera que sean sus circunstancias, pues que las acciones civiles ó criminales que nazcan del hecho ó acto de que se trate, deberán ejercitarse ante la autoridad judicial, á quien, conforme á las leyes vigentes, corresponde el conocimiento del negocio.

Considerando: que el juez actuario no es competente para sujetar á juicio al ciudadano gobernador y comandante militar del Estado.

Considerando: que aun cuando pudiera y debiera entenderse que los interesados solicitan que se les ampare contra la resolución del Supremo Gobierno del Estado, en la que declara no corresponder á su cono-

cimiento la queja que elevaron los ciudadanos Florencio Roman, Amado Aragon y socios, no procede el amparo, por no violar esta resolución garantía alguna de las que concede al hombre la carta fundamental de la República, y no haber sido emitida la moneda á que se refieren los interesados, por el Gobierno, ni por otra autoridad del Estado. Por estas consideraciones y con fundamento de los arts. 101 y 102 de la Constitución y de la ley de 20 de Enero de 1869, se falla:

Primero: que la Justicia de la Union no ampara ni protege á los quejosos contra el acto de la emisión de la moneda de palo por la compañía minera "Herrera, Gonzalez, Salazar y Compañía."

Segundo: que tampoco los ampara ni protege contra el acuerdo del ciudadano Gobernador, por el cual dispuso ocurrieran los quejosos ante los Tribunales comunes á hacer valer sus derechos y ejercitar sus acciones.

Tercero: que no ha lugar á sujetar á juicio al ciudadano Gobernador del Estado, por no haber ventilado ni debido ventilar si hay mérito para ello, ni corresponder al presente juez, el conocimiento de los negocios de esta naturaleza.

Cuarto: compúlsese testimonio de lo conducente respecto de la circulación de las piezas de madera, á fin de que, por cuerda separada y en el juicio respectivo, se falle sobre este punto lo que fuere de justicia.

Quinto: que quedan á salvo los derechos de la compañía "Herrera, Gonzalez, Salazar y Compañía" contra sus operarios y los de estos contra aquella, en cuanto á sus acciones y obligaciones mutuas, nacidas de sus contratos, para que las hagan valer ante quien corresponda, cómo y cuando les convenga. Hágase saber al ciudadano Promotor fiscal é interesado, publíquese en el periódico oficial del gobierno del Estado, y remítase copia al *Semanario Judicial* y elévense estos autos á la Suprema Corte de

Justicia para su revision. El ciudadano juez definitivamente juzgando, así lo dispuso y firmó por ante mí. Doy fé.—*José Hierro.*  
—A.—*E. Perez*, secretario.

Es copia.—Chihuahua, Octubre 8 de 1874.—*José Hierro.*—*Abraham Eriberto Perez*, secretario.

*Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.*

México, Diciembre 2 de 1874.—Visto el recurso de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Chihuahua por Florencio Roman y otros varios individuos, cuyos nombres constan á fs. 28 de las actuaciones de 1ª instancia, quejándose de que la sociedad minera que gira bajo la razon social de "Herrera, Gonzalez, Salazar y Compañía," infringiendo la fraccion 3ª del art. 111 de la Constitución federal, los obliga á recibir en pago de sus salarios como barreteros de la mina perteneciente á esa negociacion situada en el mineral de Casihuiriachic, ciertas piezas de madera, á las cuales ha asignado un valor nominal determinado, no obstante lo cual, siempre que solicitan se les cambien dichas piezas por dinero, la misma compañía las recibe solamente por la mitad de su valor representativo; y que tienen que recibir tambien en pago, efectos de primera necesidad que se les hace pasar por un precio excesivo; manifestando igualmente, que habiendo elevado sus quejas al Ejecutivo del Estado por estos hechos, el ciudadano Gobernador se ha negado á poner el remedio conveniente, por cuyo motivo solicitan tambien que se forme causa á dicha autoridad; y

Considerando: que conforme á los arts. 101 y 102 de la Constitución de la República, el recurso de amparo solo procede contra los actos de las autoridades, entre las cuales no está comprendida la sociedad "Herrera, Gonzalez, Salazar y Compañía."

Considerando: que el Ejecutivo del Estado ninguna intervencion ha tenido en la emi-

sion y circulación de las piezas de madera, y por consecuencia, que no hay bajo este respecto ningun acto de su parte, sobre el cual pueda versar el presente recurso.

Considerando: que la resolution que recaiga en estos juicios, solo debe limitarse á conceder ó negar la proteccion de la justicia federal á los individuos que la hubieron solicitado, segun lo previene de una manera terminante el art. 102 de la Constitución, por cuyo motivo no es de accederse á la peticion de los quejosos sobre que se encause el ciudadano Gobernador del Estado.

Por estas consideraciones, y con fundamento de los arts. 101 y 102 de la Constitución de la República y ley de 20 de Enero de 1869, se decreta:

1º: Es de confirmarse y se confirma la sentencia pronunciada por el Juez de Distrito de Chihuahua, en 8 de Octubre del presente año, que declara: que la Justicia de la Union no ampara ni protege á los quejosos contra la emision y circulación de las piezas de madera efectuadas por la sociedad minera "Herrera, Gonzalez, Salazar y Compañía."

2º: Que tampoco los ampara ni protege contra el acuerdo del ciudadano Gobernador, por el cual dispuso ocurrieran los quejosos ante los Tribunales comunes, á hacer valer sus derechos y ejercitar sus acciones.

3º: Que no ha lugar á sujetar á juicio al ciudadano Gobernador del Estado, por no haber ventilado, ni debido ventilar si hay mérito para ello; ni corresponde al Juez de Distrito el conocimiento de los negocios de esta naturaleza.

4º: Que se compulse testimonio de lo conducente respecto de la circulación de las piezas de madera, á fin de que por cuerda separada y en el juicio respectivo se falle sobre este punto lo que fuere de justicia.

5º: Que quedan á salvo los derechos de la sociedad, "Herrera, Gonzalez, Salazar y Compañía" contra sus operarios y los de

estos contra aquellos, en cuanto sus acciones y obligaciones mutuas nacidas de sus contratos, para que los hagan valer ante quien corresponda, como y cuando les convenga.

No se les impone multa á los quejosos, por ser notoriamente pobres.

Devuélvanse estas actuaciones al juzgado de su origen, acompañándole copia de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los ciudadanos Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*M. Auza.*—*Juan J. de la Garza.*—*Ignacio Ramírez.*—*M. de Castañeda y Nájera.*—*Ignacio Altamirano.*—*L. Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, Diciembre 20 de 1874.—*Luis M. Aguilar.*

## AMPARO

*Promovido ante el Juzgado de Distrito de Querétaro, por el C. Fernando García, contra el C. Juez de Letras de San Juan del Río, que le formó causa por portación de una pistola.*

### PEDIMENTO FISCAL.

Ciudadano Juez de Distrito.

El promotor fiscal dice: que el C. Dr. en medicina Fernando García, ha sido procesado ante el juzgado de letras de San Juan del Río, por llevar consigo una pistola de seis tiros, de las conocidas bajo el nombre de cilindro ó *revólver*. Fué registrado el quejoso en persona y á petición de su contrario, durante un juicio verbal, que se celebraba en un juzgado de paz.

El art. 10 de la Constitución federal previene: que todo hombre tenga derecho de portar armas para su seguridad y legítima defensa; y agrega, que la ley señalará cuáles son las prohibidas y las penas en que incurrirán los que las portaren.

Por estas palabras de tiempo futuro: «señalará,» se viene en conocimiento de que la Constitución consideró inaplicables al tiempo presente, las prohibiciones establecidas en las diversas reales órdenes y cédulas, que se registran en el libro 12 tít. 19 de la Novísima Recopilación; siendo de notarse, que las pistolas y armas de fuego de cierto calibre, eran antiguamente de uso permitido, como puede verse en una pragmática de 1771, citada por Vilanova en su práctica crim. obs. 11. cap. 7. núm. 51.

Además de estas leyes, se observarán en esta materia en México, la providencia núm. 11 inserta en el tomo 29 de la Recopilación de Bclla, comunmente llamada «autos acordados;» así como también el bando de 13 de Enero de 1815. Por estas disposiciones se advierte la grande diferencia que habia entre portar armas prohibidas, y portar sin licencia las permitidas, y esto en tiempo del gobierno colonial.

En 23 de Noviembre de 1835, se publicó un bando que reconoce la misma distinción; pues reglamentaba para el Distrito Federal, el modo de pedir las licencias de armas. La suprema circular de 14 de Febrero del mismo año de 1835, dice hablando de los militares: «Llevarán consigo en todos los actos del servicio y asistencia de ley, las armas que les están concedidas, no pudiendo en ningún caso usar de las prohibidas.» De aquí se deduce, que las armas permitidas á los militares, lo están á los paisanos, previa la licencia respectiva; y que usando los primeros las pistolas de cilindro, comunmente llamadas *revólver*, es su uso permitido á los ciudadanos, previa la respectiva licencia. Las armas de munición, como propiedad del Estado, se exceptúan de esa regla, por distinto principio, á saber: